

La Emergencia de los Jóvenes en la Crítica y la Construcción del Poder: la Experiencia chilena

1. Breve recuento situación chilena

“Y va a caer, y va a caer, la educación de Pinochet”. Esa frase, convertida en grito, se ha convertido en la más simbólica de las masivas movilizaciones estudiantiles chilenas de los últimos años. 40 años después de que Augusto Pinochet encabezara el golpe de Estado que derrocó al presidente Socialista Salvador Allende, 23 años después de que su dictadura terminara, 7 años después de la muerte del dictador; cientos de miles de jóvenes, la mayoría de ellos nacidos en los últimos años de la dictadura o incluso en democracia, seguimos llamando a nuestro modelo educativo como un modelo de Pinochet, y bregamos por derribarlo. Grito que tiene un carácter simbólico no menor, pues es la extensión del popular grito de “y va a caer” de los ‘80, dejando en claro que el dictador cayó pero su obra se mantuvo intacta.

Lo anterior es tremendamente simbólico del momento político y social que se vive hoy en Chile. Un país que ha sido reconocido internacionalmente por su “transición ejemplar” de la dictadura de a la democracia, que durante muchos años se autodenominó el jaguar de América Latina, pero que sin embargo hoy ve fuertemente cuestionados varios elementos centrales de su sistema socioeconómico, y quienes han liderado tal cuestionamiento son los jóvenes. Más aún, con mucha fuerza jóvenes universitarios, supuestamente los grandes beneficiados del modelo.

Esta aparente contradicción tiene explicaciones tremendamente lógicas. Hagamos un pequeño recuento de como se construyó el Chile actual.

El Chile de 1990 era un país absolutamente diferente de aquél de 1973. Aunque a muchos no nos guste “manchar” la palabra, la dictadura pinochetista fue totalmente revolucionaria, cambiando todos los aspectos de cómo vivían y cómo se organizaban los chilenos. Además de las persistentes violaciones a los derechos humanos, las desapariciones forzadas y las torturas, que dejaron a una izquierda casi inexistente y a un tejido social destruido, para los efectos de este análisis hay 2 bloques de reformas que son las principales y que se consagran en la aún vigente Constitución de 1980:

- Estado subsidiario, mercantilización de los Derechos básicos: La salud, la educación y la previsión vivieron sendas reformas, siguiendo las recomendaciones de Milton Friedman. En resumen, el rol principal lo asumen las empresas privadas, que motivadas por el negocio administran estos derechos, y el Estado pasa a tener un rol meramente subsidiario, regulando (mal) que exista libre competencia y

asegurando niveles mínimos de servicio para aquellos nichos que no son rentables para el negocio.

- Reformas políticas: La imposición de un sistema electoral que prácticamente garantiza un empate en cada cámara y la necesidad de quórumos altísimos para hacer modificaciones construyeron un modelo que tiende al inmovilismo, la consolidación de la existencia de dos grandes bloques y una tremenda dificultad para hacer política por fuera de ellos.

Para finalizar la dictadura, existió un arduo debate en la oposición respecto a si validar el mecanismo existente en la Constitución de 1980 (que a la vez legitimaba tal Constitución) o si intentar un derrocamiento por fuera de la vía institucional. Finalmente, los principales partidos políticos del país, tanto oficialistas como de oposición, lograron un acuerdo nacional que consolidó el plebiscito de 1988, así como reformas constitucionales que se hicieron entre la derrota en las urnas de Pinochet en 1988 y su retirada del poder en 1990.

Lo anterior cobra relevancia pues permite entender que la llegada de la democracia en Chile fue consensuada con quienes ostentaron el poder durante la dictadura, y por tanto los márgenes en los cuales se pudieron hacer reformas estaban totalmente delimitados, y los pilares de las reformas implantadas en dictadura quedaban fuera.

Con ello, cuando vuelven los gobiernos civiles existen en Chile dos grandes bloques políticos, que se diferencian fuertemente respecto al rol que jugaron en la dictadura (una Derecha muy conservadora que defiende a Pinochet y una Concertación muy crítica de las violaciones a los DD.HH.), pero que en cuanto al proyecto país que defienden son casi idénticos.

Más aún. Los 20 años de Concertación no fueron solamente de una burda complacencia con los márgenes definidos por la Constitución, sino que incluso profundizaron la concepción mercantil de los derechos básicos. La privatización de las empresas sanitarias es un ejemplo, el invento medieval de carreteras privadas es otro, pero en educación, el tema que nos ha movilizado, es donde más abundan tales reformas. Profundizaremos en ello más adelante.

Se gobernó en esos 20 años con la “política de los consensos”, es decir, que toda reforma de algún nivel de importancia se construía en base a un consenso entre la Concertación y la Derecha. Eran consensos muy amplios a nivel político, pero en general sin respaldo a nivel social. Y es que los partidos políticos chilenos perdieron la vocación de ligarse a sectores sociales. El concepto de “clase política” no es gratuito, sino que se debe a que se observa un grupo que se autorreproduce y defiende sus propios intereses, teniendo diálogo solamente con el empresariado. Cabe mencionar que esto sí permitió ciertos avances en las cuestiones “valóricas”; Chile es uno de los países más conservadores del mundo y aspectos tan básicos como contar con una Ley de Divorcio recién se logró en estos últimos años.

En síntesis, el país que entregó la Concertación el 2010 era bastante aún más neoliberal que el que recibió en 1990. Fue la Concertación la que nos acostumbró a la lógica de los bonos y de los vouchers. Si bien utilizó una fraseología progresista para defenderlos, la lógica siguió siendo la misma: el rol del Estado es solamente subsidiar aquellos aspectos donde el mercado no llega.

El último punto a comentar tiene que ver con el rol pasivo que jugaron en general los movimientos sociales, al menos hasta el 2006. Si bien existieron esfuerzos desde las poblaciones y el problema de la vivienda y con el conflicto entre Chile y el pueblo mapuche nunca resuelto, desde los '90 el movimiento estudiantil se perfiló como aquél con mayor capacidad de movilizarse y de interpretar los problemas del Chile post-dictadura. Pero en la práctica no logró una masividad ni una trascendencia grande durante aquellos años, y sus demandas se mantuvieron en una lógica exclusivamente peticionista. Es importante comprender también que para las generaciones que vivieron la dictadura, pensar en hacer política, pensar en la existencia de disensos, muchas veces significaba pensar en experiencias traumáticas, en la tortura y el asesinato, y por tanto la posibilidad de movilizarse o de organizarse quedaba desechada a priori.

Es decir, el Chile de la transición es un país que no cuestiona las lógicas neoliberales heredadas de la dictadura, que tiene un sistema político muy cerrado y gobernado por dos coaliciones con una visión país muy similar. Solamente una movilización importante podía sacudir estos consensos, y ello no ocurrió hasta 2006 y especialmente cambió el 2011.

2. Recuento del sistema educacional chileno.

Para entender bien las movilizaciones que ha protagonizado la juventud chilena, es necesario comprender de buena forma el sistema educativo que nos rige. Más que mal, es el "enemigo". No es la idea hacer un análisis exhaustivo, pero sí explicar sus características principales y también sus consecuencias más relevantes. Entender, entre otras cosas, porque decimos que hoy funciona como un negocio más.

Partamos por el sistema escolar. En Chile existen 3 tipos de colegios: los privados, los particulares subvencionados y los públicos. Los privados son aquellos colegios caros, donde el Estado tiene poco que decir salvo algunas regulaciones básicas, y es en general donde las élites envían a sus hijos, recibiendo aproximadamente a un 7% del total de estudiantes.

Los establecimientos particulares subvencionados son privados pero reciben subvención del Estado para funcionar. Existen varios religiosos, aunque en su mayoría tienen fin de lucro y son un excelente negocio. El gobierno de Patricio

Aylwin permitió además que estos establecimientos cobren, bajo el supuesto razonable argumento de “¿por qué prohibir a un padre aportar con dinero a la educación de su hijo?”. La consecuencia es una sola: cada cual compra exactamente la educación para la que le alcanza su bolsillo, y así construimos un sistema perfectamente segregado, el segundo más segregado del mundo según la OCDE. Es muy simple: cuando un padre paga, lo que está comprando es el derecho de su hijo a no estudiar con quienes son más pobres que él. Hoy más del 50% de los estudiantes va a este tipo de establecimientos. Cabe mencionar que en 1990 este guarismo apenas sobrepasaba el 30%..

Por último, en el sistema público es donde se hace más gráfico el principio de la subsidiariedad, en la lógica de que el Estado solamente exista para quienes la iniciativa privada no alcanza. Peor aún: todo aquél que puede escapar de la educación pública, lo hace. La educación pública escolar en Chile está municipalizada, es decir, depende de las alcaldías el como se administra. Por supuesto las municipalidades más pobres carecen de los recursos suficientes, y por lo tanto se incrementa la desigualdad, pero además el proveer educación se convierte en una molestia, y por lo tanto nos hemos acostumbrado a leer noticias sobre cierre de escuelas y liceos públicos. Las únicas excepciones son aquellos liceos históricos, que mantienen su prestigio pero a costa de una rigurosa selección académica para ingresar, completando con esto la famosa segregación.

A todos estos establecimientos se los mide con la misma vara. Las pruebas SIMCE son pruebas estandarizadas que deben ser rendidas por cada estudiante, llegando a la locura de que cada año se toman hasta 15 SIMCE en las diversas áreas. Estos puntajes luego están asociados a ciertos dineros, aunque fundamentalmente son utilizados como un indicador de calidad para perfeccionar el mercado, pues así cada cual sabe qué es lo que está “comprando”. Esta lógica reduccionista afecta los currículum (se prioriza el enseñar solamente aquellos contenidos evaluados en estas pruebas), provoca que la educación se convierta en un adiestramiento para saber contestar estas pruebas en lugar de construir ciudadanos integrales, estresa a las comunidades educativas (al punto que en muchas de ellas se pide a los estudiantes de peor rendimiento no ir al colegio los días que tales pruebas se rinden), no se hacen cargo de las diferencias entre los diversos establecimientos; en resumen, enajenan y reducen el proceso educativo para que pueda estar más acorde a lo que su mercadización exige.

A nivel de educación superior el escenario no mejora. La reforma de Pinochet (1981) al sistema universitario cercenó a las Universidades del Estado y permitió la fácil creación de Universidades nuevas, fuera del viejo sistema público. Teóricamente se prohibió que tuviesen ánimos de lucrar, pero en la práctica es letra muerta.

Vamos por partes: el Estado reconoce dos tipos de Universidades, aquéllas “tradicionales” fundadas antes de 1981 (incluyendo todas las Estatales) y aquéllas fundadas después. De esta forma, la relación del Estado con las Universidades que le pertenecen es equivalente, por ejemplo, a la que tiene con la Pontificia

Universidad Católica, pues ambas son “tradicionales”. En todo caso, en ambos ejemplos la relación es casi nula: la Universidad de Chile, por ejemplo, menos del 10% de su presupuesto anual está provisto por el Estado, y por tanto cobra aranceles tanto o más caros que el resto de las Universidades del país. En la práctica, el carácter de público de una Universidad en Chile no lo da su relación con el Estado, sino que su historia, sus comunidades, su organización interna, y por lo mismo es un carácter sumamente débil. Gran parte del quehacer de una Universidad, por Estatal que sea, está orientado a reunir los fondos que le permitan sobrevivir, afectando la docencia, la investigación y la extensión. Son 25 las Universidades tradicionales y concentran a un poco menos de la mitad del estudiantado.

Las Universidades fundadas después de 1981 también reciben fondos del Estado, aunque en menor cantidad. La regulación de parte del Estado es prácticamente nula, se suele decir que “abrir una Universidad en Chile es más fácil que abrir una botillería”. Aquí es donde se concentra el mayor negociado: si bien hay excepciones, la mayor parte de estas Universidades han crecido exponencialmente merced al buen negocio que son. Utilizando resquicios legales, extraen las cuantiosas utilidades por el lado. Existen diversos ejemplos que muestran lo desastroso de este modelo: el año 2012, la Universidad del Mar, con 18.000 estudiantes, resultó ser un mal negocio, por lo que se declaró en quiebra dejando a todos esos estudiantes en la calle. La quiebra no fue impedimento para que los dueños de la Universidad extrayeran un par de millones de dólares el mismo año; incluso un ex Rector cayó preso y desde la cárcel vendió algunas sedes de la Universidad. Laureate International Universities, una verdadera empresa trasnacional de la venta de títulos universitarios, tiene 2 Universidades en Chile: la Universidad Andrés Bello, orientada a estudiantes un poco más acaudalados, y la Universidad de las Américas, más barata y de peor calidad, orientada a otro nicho de negocios. Ambas son de las Universidades más grandes del país.

Dado que el financiamiento a las Universidades no viene desde el Estado, viene del bolsillo de los estudiantes. Un arancel promedio en Chile es de aproximadamente 500 dólares al mes. El sueldo mínimo acaba de subir a un poco más de 400. Como casi nadie puede pagar esas cantidades, la solución ha sido un sistema de becas y créditos. La inmensa mayoría sale con deudas que pueden significar comprarse una casa. El asunto empeora cuando el gobierno de Lagos (2005) inventa un nuevo tipo de crédito, que invita a los bancos a llevarse también un pedazo de la torta. No es coincidencia que el estallido estudiantil haya sido 6 años después, cuando se empiezan a graduar las primeras generaciones que estudiaron con esos créditos y se enteraron de cuanto tendrían que pagar.

El último comentario es respecto a la educación superior técnica. En este mundo, el Estado decidió definitivamente abandonar. Aquí el lucro es permitido, las carreras que se enseñan a veces no existen, no hay educación pública y por tanto

cada cual se rasca con sus propias uñas. Donde obviamente, las uñas más grandes y que terminan rascando a todos son las de los dueños de estos establecimientos.

El sistema de educación superior ha crecido mucho desde que éste se desregularizó, lo que es celebrado por los defensores del sistema. Una idea similar sería festejar porque un hospital recibe más enfermos, sin preocuparse de si estos se mejoran adentro del hospital.

En resumen: el sistema ha crecido muchísimo, pero a costa de endeudar en niveles estratosféricos a los estudiantes. La educación pública ha ido desapareciendo, y la educación privada no tiene ningún tipo de control. Básicamente, el modelo chileno es un modelo perfecto para los dueños de los establecimientos, pero en ningún caso favorable para sus estudiantes ni mucho menos para el resto del país.

3. Las movilizaciones de 2006 y 2011

Esta crisis del sistema educativo chileno, su desigualdad, sus altos niveles de endeudamiento, su segregación, fueron incubando un malestar y una rabia muy grande en la juventud chilena. Ya el 2001 y el 2005 hubo ciertos estallidos, pero el 2006 cambió los márgenes, tanto por su fuerza como por la profundidad de sus demandas. Este proceso de movilizaciones es conocido como “La Revolución Pingüina”, pues sus principales protagonistas fueron los estudiantes secundarios, quienes son popularmente denominados como tales animales antárticos por el color de sus uniformes.

Cientos de liceos, a lo largo de todo el país, se fueron a toma. Partiendo con demandas muy simples, como la gratuidad de la prueba que dan los estudiantes secundarios cuando van a entrar a la Universidad, pero rápidamente la demanda principal fue la derogación de la LOCE (Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, promulgada por Augusto Pinochet un día antes de dejar el poder y que regía el sistema educacional chileno en general).

Este estallido duró algunas semanas, pero su resolución significó aprendizajes y maduraciones indispensables para comprender lo que ocurrió en los años posteriores. Las diversas tomas habían concitado un tremendo apoyo a nivel nacional, pues la desigualdad, la mala infraestructura y la baja calidad en general de la educación chilena eran evidentes. Para resolver, la entonces Presidenta Michelle Bachelet anunció en cadena nacional ciertas concesiones a las demandas de corte más economicista, y la conformación de un Consejo Asesor Presidencial para estudiar una posible reforma a la LOCE.

Tal respuesta fragilizó la movilización, aun cuando no fue considerada satisfactoria por amplios sectores del movimiento estudiantil, pues no implicaba ningún

compromiso concreto respecto a cuáles serían tales reformas. Sin embargo, el principal vocero renunció aduciendo “razones personales”. Su militancia era del Partido Socialista, mismo partido de la Presidenta. Con ello, prontamente las movilizaciones terminaron.

Sin embargo, lo más relevante sucedió dos años después. El Consejo Asesor, que contenía presencia estudiantil pero en una porción muy pequeña, sesionó por dos años. Pese a la heterogeneidad de su composición, propuso cambios que si bien no significaban todo lo exigido, evidentemente eran un avance en la dirección correcta. Sin embargo, ante la dificultad de conseguir los consensos políticos para impulsar las reformas que su propio Consejo Asesor había propuesto, Michelle Bachelet optó por no provocar un conflicto, y finalmente se aprobó una nueva LGE (Ley General de Educación), construida como un consenso entre los partidos políticos pero excluyendo a los diversos actores sociales. Esta LGE es muy similar a la antigua LOCE, manteniendo todas las características ya descritas (incluyendo el tema del lucro, demanda que ya había sido potente y explícita el 2006). El momento más gráfico es una foto en la que salen todos los presidentes de partidos políticos junto a la Presidente y su Ministra de Educación con las manos en alto celebrando el acuerdo alcanzado, mientras en las calles se expresaba el rechazo.

Tal evento marcó a los estudiantes que se habían movilizado el 2006. El sistema político, ya fuertemente cuestionado, perdió toda legitimidad frente al actor estudiantil. Y la figura de Michelle Bachelet más aún.

Hasta el 2011 hubo muy poca movilización. El final del gobierno de Michelle Bachelet significó un repunte muy grande de su legitimidad y adhesión, aún cuando a nivel estudiantil se mantienen los reparos por la experiencia recién descrita. El primer año del gobierno de Sebastián Piñera, primer presidente de la derecha post-dictadura, estuvo marcado por el terremoto de 8.8 grados Richter del 27 de Febrero de 2010.

El 2011 comenzó con una movilización importante en Punta Arenas, en el extremo sur del país, por el precio del gas. Durante mayo, cuando el movimiento estudiantil mostraba sus primeras armas, hubo movilizaciones enormes, espontáneas, contra la aprobación de un megaproyecto hidroeléctrico en la virginal Patagonia chilena. Nunca desde la dictadura se había visto tanta gente junta en las calles, que no estaban respondiendo a ningún llamado, sino que simplemente a protestar contra tal aprobación. La respuesta del gobierno fue solamente reprimir.

Sin embargo, fueron las movilizaciones estudiantiles las que marcaron la agenda ese año. Hasta 7 meses de paros y tomas en la mayor parte de las Universidades tradicionales y liceos públicos del país. Marchas frecuentes con convocatorias que llegaron a ser incluso de hasta 200.000 personas sólo en Santiago. Flashmobs, besatones, corridas por la educación y toda la creatividad estudiantil desatada.

En esta ocasión, las demandas fueron mucho más profundas. Como veremos, las dos grandes consignas mostraron su radicalidad: “Fin al lucro en la educación” y “Educación pública, gratuita y de calidad”. En esta ocasión, las demandas exigidas no cabían en los márgenes de la transición de la dictadura a la democracia comentados anteriormente, pues exigían que el Estado asumiera un rol garante de derechos sociales.

La transversalidad social es también digna de destacar. Durante ese año no fueron solamente quienes tradicionalmente se han movilizado los que salieron a las calles, sino que se logró convocar a un sector muchísimo más amplio de la ciudadanía. En particular a los estudiantes de Universidades privadas: mientras a principio de las décadas de los 2000 la rivalidad era la costumbre, el 2011 se logró comprender el carácter sistémico del problema educacional y ser un solo cuerpo. Esto es especialmente relevante en cuanto las Universidades privadas son el lugar donde muchísimos jóvenes de las nuevas clases medias han logrado entrar a estudiar.

Las movilizaciones mantuvieron un constante apoyo de parte de la ciudadanía. Cada encuesta mostraba que el apoyo al movimiento estudiantil se encumbraba por sobre el 70 u 80%, mientras que el apoyo al Presidente se desplomaba a menos de un cuarto de la población. Esto se agudizó el 4 de agosto de ese año, cuando Santiago amaneció en un verdadero estado de sitio frente a una marcha no autorizada. Durante la noche y a modo de respuesta, los cacerolazos se sintieron en todo el país por primera vez desde los '80, y la represión no fue solamente a los estudiantes sino que a cualquiera que pusiera un pie en la calle. El 25 de agosto, en una nueva jornada de protesta, Manuel Gutiérrez, estudiante secundario, murió por una bala disparada por la policía que reprimía sin control en la periferia de la capital.

La deslegitimación de los partidos políticos también se extremó, pues se hizo explícita su desconexión con las demandas sociales y su incapacidad para resolver el conflicto. Por un lado, desde el Parlamento aparecían diversas iniciativas, en general sin ningún apoyo político, más parecidos a un espectáculo mediático que a un verdadero intento de reforma a la educación. Además, la experiencia del 2006 había enseñado que delegar en el Parlamento no era buena idea, y por lo tanto desde el CONFECH -instancia de agrupación de los estudiantes universitarios, organización en la que recae la vocería- se exigía interlocución directa con el Ejecutivo.

Y el Presidente lo hacía tanto peor. Mientras cuatro quintos de los chilenos querían poner fin al lucro en la educación por sus desastrosas consecuencias, Sebastián Piñera proponía legalizarlo. Evidentemente aquello no cursó, pero finalmente la única reforma a la que estuvo dispuesto fue a bajar la tasa de interés de los créditos bancarios mediante un subsidio directo del Estado a la banca privada. Es evidente cuan aberrante es que el Estado entregue recursos de todos los chilenos a los dueños de los bancos, pero lo central es entender cómo se buscó desde la política chilena resolver el conflicto: descomprimiendo el

endeudamiento burdamente excesivo, pero sin salirse un ápice de las lógicas neoliberales en educación.

Cabe señalar que a partir del conflicto educacional, otros conflictos comenzaron a ver la luz. El propio movimiento estudiantil comenzó a clamar por una reforma tributaria que permitiera financiar la educación gratuita, y por la creación de los plebiscitos legales en Chile, para poder resolver el conflicto ante la incapacidad de los poderes del Estado. Estas demandas tenían además un carácter estratégico, al develar el carácter además económico del problema (Chile es uno de los países más desiguales del mundo) y hacer explícito el conflicto político subyacente: una clase política anquilosada, indispuesta a ceder frente a las demandas de una inmensa mayoría de la población.

El estallido estudiantil ha provocado además una ola de movilizaciones en el país por distintas temáticas: regionalistas, laborales, medioambientales, entre otras. El conflicto educacional ha seguido avanzando, aunque para los efectos de esta presentación no es relevante ahondar en ello. Sí el relatar que varios de los principales dirigentes estudiantiles son hoy candidatos a diputado, lo que será explicado y analizado con mayor detalle más adelante.

5. Rol de la educación superior en modelos neoliberales.

Son diversos los problemas sociales relevantes en Chile. La salud, las pensiones, la desigualdad, la contaminación, son diversos ejemplos. Vale detenerse entonces a preguntarse por qué fue la educación el tema central que comenzó a movilizar al país, y por qué fue la juventud quien lideró tales protestas. Más aún en el marco de este seminario.

Es necesario para ello primero explicar que Chile es un país que ha tenido un muy fuerte crecimiento las últimas décadas, a costa de que la desigualdad se vaya exagerando. Ello ha significado que importantes sectores de la población, en especial las clases medias, hayan incrementado su capacidad de consumo, pero basadas en un fuerte endeudamiento. Hoy son muchos los chilenos que tienen televisores plasma y computadores portátiles, pero ellos mismos posteriormente tienen problemas para quedarse dormidos por no saber cómo pagarán sus deudas.

Lo anterior se exagera al no existir derechos básicos. Cualquier enfermedad, perder el trabajo, incluso envejecer puede significar caer en la pobreza, por la fragilidad de la economía del hogar. Los trabajos son muchas veces informales y de extenuantes jornadas.

En resumen: es un país donde el consumo crece al mismo tiempo que la vulnerabilidad y la inseguridad. El presente parece prometedor, pero el futuro es una incertidumbre. Frente a ello, la promesa del relato chileno recayó en la

educación. Los chilenos de la transición sentían que quizá hoy la fragilidad sea la norma, pero cuando sus hijos vayan a la Universidad, podrán acceder a una mejor calidad de vida y sus problemas desaparecerán.

En este sentido, la educación, y en particular la superior, se convirtió en depositaria de las esperanzas de miles de familias chilenas. La cobertura en educación superior se disparó, con publicidades que justamente aseguraban cumplir los sueños de cada estudiante.

Cuando estas promesas y esperanzas se enfrentaron con la cruda realidad, la situación comenzó a hacerse insostenible. Deserciones que pueden llegar a la mitad del estudiantado en las Universidades más precarias, deudas incluso peores que las ya existentes, y títulos muchas veces inútiles por la baja calidad de las instituciones y por la nula regulación de la cantidad de profesionales en áreas determinadas (coincidentalmente, aquellas áreas que son más baratas de impartir, es decir, las más lucrativas para los dueños de las Universidades) significaron que ir a la Universidad significó, para muchos estudiantes, simplemente perder mucho tiempo y mucho dinero.

La educación escolar también aporta lo suyo. Un sistema tremendamente desigual, en el cual a los estudiantes se les enseña más bien a no tener sueños, es un sistema que genera mucha rabia y mucha impotencia. La trayectoria de un estudiante escolar promedio puede perfectamente ser la siguiente: ir en básica a un liceo con mala infraestructura, con más de 40 estudiantes en su sala, un profesor con poco tiempo para preparar las clases y cuya prioridad es adiestrar al niño para sacar el mejor puntaje SIMCE posible, para que luego ese mismo bajo puntaje SIMCE le diga al niño que estando en ese liceo es poco el futuro al que puede aspirar. En secundaria la situación no mejorará, si tenía algún compañero cuyas condiciones le permitieron tener mejor rendimiento, a estas alturas ya habrá escapado y por lo tanto el círculo de la segregación se completará.

Aquello es central, aunque no es lo único. La tremenda empatía generada desde cada hogar chileno tiene que ver con que el endeudamiento se ha vuelto un problema concreto para casi todo chileno. Estudiantes indignados por su endeudamiento es algo que no puede ser sino tremendamente asumido como propio. Por lo demás, prácticamente en cada casa chilena hay un estudiante, y se hacen evidentes sus razones para reclamar.

El cansancio frente al abuso también aportó su cuota. No es casualidad que la demanda por terminar con el lucro se haya vuelto la más aprobada. Pocos años antes se conoció la colusión existente entre las principales farmacias del país y como sus dueños se enriquecían con nuestras enfermedades, el mismo 2011 estalló un escándalo por estafas en los créditos entregados por una conocida multitienda -uno de cuyos locales más céntricos fue quemado el ya mencionado 4 de agosto-, y por lo mismo era muy fácil imaginar la caricatura muy realista de los dueños de las Universidades privadas comprándose sus yates con las deudas de sus estudiantes.

¿Por qué estalló ese año? Seguramente una suma de diversos factores: ese año se titulaban las primeras generaciones que estudiaron con crédito bancario, y por tanto la tan temida deuda se convirtió en una cruda realidad, en un porcentaje importante de sus ya pequeños sueldos, condena que puede durar hasta 20 o 30 años. El pésimo manejo de un gobierno de derecha. Y por cierto, la experiencia de una generación que ya se había movilizó el 2006 y que no estaba dispuesta a repetir los mismos errores.

No es coincidencia que en los países neoliberales en general la juventud haya adquirido un protagonismo político renovado. El análisis recién hecho, si bien en muchas aristas Chile representa un caso extremo, es un análisis válido para cualquier sistema educacional en un país neoliberal, y por lo tanto es esperable que la juventud más temprano que tarde sienta la necesidad de organizarse y movilizarse. Más aún cuando la precarización del mundo del trabajo, con el crecimiento de la subcontratación y del trabajo informal, hacen muy difícil que sean los trabajadores quienes tomen el protagonismo.

Así, esto nos otorga una primera luz respecto a la emergencia de los jóvenes en la política y en la disputa por el poder. No es solamente la usual rebeldía juvenil, es algo más profundo: es que nuestros países se construyeron haciendo falsas promesas, cuyas víctima directa fueron precisamente la juventud.

6. Las demandas del movimiento estudiantil chileno. La lucha por un Estado garante de derechos como una forma de ampliar la democracia.

Quisiera profundizar ahora en las demandas que han emergido al calor de las movilizaciones estudiantiles chilenas, no tanto desde el punto de vista estrictamente educacional, sino de como significan una disputa por el carácter del Estado, como es una lucha democratizadora y su politización.

Si hubiese que resumir el petitorio en una línea, esta sería “Que la educación deje de ser concebida como un negocio y pase a ser considerada un derecho social básico garantizado por el Estado”. Esto tiene diversas bajadas concretas, como son el fortalecimiento y la expansión de la educación pública, el terminar con el lucro, terminar con la municipalización y el copago, democratizar liceos y Universidades, y garantizar la gratuidad mediante aportes directos del Estado.

Esta última demanda es la más simbólica y representativa. La universalización del derecho a la educación, el subsidio a la oferta en vez de a la demanda, significa que el Estado deje de tener un rol subsidiario y pase a tener un rol garante. Significa pelear porque la educación sea un espacio realmente público, donde la relación entre estudiantes y de cada uno de ellos con su Universidad no dependa de cuanto dinero tengan, sino que sea igual para todos. Significa terminar con la lógica de focalización que nos hace depender del formulario usado cada año para poder estudiar, sino que entender que hay ciertas áreas de nuestras vidas que

están garantizadas diga lo que diga el mercado. Significa además dejar de entender a la educación como una inversión individual para aumentar los sueldos posteriores, terminar con la lógica de competencia entre instituciones, terminando con los vouchers, créditos y becas para pasar al financiamiento directo. Que la educación sea un derecho social significa entender que al país le conviene tener buenos profesionales y buena investigación al servicio de las necesidades de nuestro pueblo, y que ello ocurrirá solamente si el modelo educativo está enfocado en esa línea. En palabras de Salvador Allende en este mismo país, en Guadalajara en 1972, no queremos más jóvenes viejos, y sabemos que aquello no está dado, sino que depende del carácter que le demos a nuestra educación:

“Hay jóvenes viejos que comprenden que ser universitario, por ejemplo, es un privilegio extraordinario en la inmensa mayoría de los países de nuestro continente. Esos jóvenes viejos creen que la universidad se ha levantado como una necesidad para preparar técnicos y que ellos deben estar satisfechos con adquirir un título profesional. Les da rango social y el arribismo social, caramba, qué dramáticamente peligroso, les da un instrumento que les permite ganarse la vida en condiciones de ingresos superiores a la mayoría del resto de los conciudadanos.

Y estos jóvenes viejos, si son arquitectos, por ejemplo, no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países y, a veces, ni en su propio país. Hay estudiantes que con un criterio estrictamente liberal, hacen de su profesión el medio honesto para ganarse la vida, pero básicamente en función de sus propios intereses.”

Las demás demandas van en la misma línea: erradicar totalmente al mercado de la educación, para garantizar a ésta como un espacio público no mediado por el dinero. Mucho se ha contraargumentado que es regresivo financiar la educación a los más ricos. No me explayaré aquí en como una verdadera reforma tributaria y hacerse cargo de los recursos naturales entregarían recursos más que suficientes, sino que enfatizar que el modelo educativo que hemos exigido es incompatible con el tipo de Estado que existe hoy en Chile.

Nuestra lucha es democratizante en dos sentidos, el propiamente reivindicativo y el más político. El reivindicativo está justamente dado por lo anterior: luchar por la construcción de espacios realmente públicos donde todos seamos iguales es justamente luchar contra la concentración de poder de unos pocos, consolidar por la segregación y por su libertad de elección supeditada a coartar las libertades ajenas. Cuando uno analiza el Chile actual, prácticamente la totalidad de las acciones que uno realiza dependen del tamaño de la billetera, desde moverse en la ciudad hasta la elección de pareja. Posiblemente la respiración, bañarse en el mar y por cierto ir a marchar son de las poquísimas excepciones. Luchar porque la educación, espacio donde en gran medida se construye la sociedad del futuro, sea otra excepción, es luchar por un Chile más democrático. Desmercantilizar la educación significa que ésta dependa del diálogo político y democrático, en lugar de depender del mercado y finalmente de los dueños de ésta.

Pero en el plano más político, las movilizaciones estudiantiles son lo más democrático que le ha ocurrido a Chile desde que terminó la dictadura. Si entendemos que un país realmente democrático es aquél en que los diversos intereses sociales son considerados a la hora de dar las discusiones políticas y luego tomar decisiones, entonces por primera vez vemos que demandas que son sentidas por amplios sectores de la sociedad comienzan a tomar forma y a incidir en el juego del poder. Hasta ahora, la discusión política se limitaba a lo que los propios partidos proponían, o bien lo que las élites exigían.

7. La necesaria politización de los movimientos sociales.

Antes de profundizar la proyección política de lo que ha ocurrido en las calles, y la disposición de nuestra generación para hacerse cargo, su vocación de poder, es necesario incorporar otro elemento al análisis sobre el rol de la juventud en Chile.

Quienes hoy tienen menos de 30 años en Chile somos personas que teníamos menos de 5 años para el plebiscito de 1988. Muchos de quienes se han movilitado, de hecho, nacieron ya en democracia. Eso implica varias cosas, como el conocer tanto el proyecto de Allende como la dictadura solamente por el relato que nos hayan contado, o también el no conocer un proyecto país diferente al modelo neoliberal en el cual crecimos, que de hecho suprime toda la discusión política y la suplantada por una supuesta discusión técnica, eliminando de hecho la noción misma de proyecto país.

Sin embargo, lo más relevante es el comprender que nuestra generación es una que no le teme a la política ni a los disensos. Si el Chile de la transición se conformó con la lógica de los consensos, por excluyente que ésta fuese, tiene mucho que ver con los traumas y heridas abiertas que dejó la dictadura. Para nuestros padres, hablar de política, reconocer que hay diversos proyectos país y que estos se enfrentan políticamente y que deben resolverse democráticamente, significa pensar en muerte, en tortura, en represión. Durante mucho tiempo la conformidad confundida con resignación fue ley, porque organizarse y hacer política era muy peligroso. Si bien este fenómeno es especialmente fuerte en el caso chileno, se puede hacer un paralelo con lo que significó la guerra fría en el mundo entero, permitiendo comprender porque en otros países también la juventud ha jugado este rol.

Esto no es solamente una idea abstracta. Durante los primeros años de la Concertación, cuando se jugó el modelo país que defenderían, la excusa de “la medida de lo posible” fue sistemáticamente repetida, especialmente en el gobierno de Patricio Aylwin (1990-1994). Lo posible, por cierto, estaba definido por la paciencia de Augusto Pinochet, aún Comandante en Jefe del Ejército por aquellos años, y su medida por los límites de la Constitución de 1980 y sus defensores en todo el arco político. Cabe destacar que hubo que esperar que Augusto Pinochet fuese tomado detenido en otro país (Inglaterra) para que pudiera ser juzgado por

sus crímenes, y que hasta el día de hoy los violadores de DD.HH. presos cuentan con cárceles especiales y lujosas.

Sin embargo, para nuestra generación es diferente. Nosotros no conocimos el miedo a la tortura o a perder la vida. Pero sí conocimos el miedo de nuestros abuelos a envejecer y que la pensión no fuera suficiente, el miedo de nuestros padres a quedar desempleado y que las deudas se convirtieran en una condena, el miedo de nuestros hermanos mayores a salir de la Universidad y enfrentarse con la cruda realidad ya largamente descrita. Pero conocer ese miedo no nos inmovilizó, sino que nos hizo comprender que Chile debe ser distinto y que eso solamente ocurriría si tomábamos el futuro de Chile en nuestras manos. Básicamente, si hacíamos política.

Con esto, vemos que son al menos tres los factores -interrelacionados entre sí- que explican porqué en Chile la juventud ha protagonizado una emergencia hacia la política: el hecho de ser víctimas directas de la principal promesa del modelo, el no cargar directamente con los traumas que durante años inmovilizaron a nuestra sociedad, y la disposición a imaginar un país y por tanto plantear demandas fuera de los marcos de la herencia pinochetista. Quisiera agregar además que las condiciones materiales para movilizarse son especialmente convenientes cuando uno es estudiante.

En ese sentido, y apuntando directamente al título de este panel, la emergencia de los jóvenes en los procesos sociales y políticos no es coincidencia. Pero no hay que confundirse, la juventud no es una clase social, por lo mismo no es suficiente para impulsar las transformaciones. Más bien se han convertido en intérpretes de un malestar social, y por lo mismo han catalizado movilizaciones sociales en otros sectores, interpelando especialmente a las clases medias, cuyos hijos son primera generación en la Universidad y se han dado cuenta que ello pareciera ser más bien un castigo que algo positivo.

Profundicemos ahora de que manera se da esta emergencia. Ya hemos comentado el divorcio entre los partidos políticos y los diversos actores sociales, y por tanto el nulo diálogo existente entre “lo político” y “lo social”. La pregunta clave es si lo que ha ocurrido en las calles efectivamente tiene vocación de poder, o si se limitará a la movilización y a su inherente carácter peticionista.

Las experiencias del 2006 -con su respectiva traición de 2008- y 2011 le enseñaron a nuestra juventud que no es posible seguir delegando en los mismos de siempre si se quiere hacer transformaciones reales. Esto puede derivar en prácticas despolitizadas (como el apoyo a candidaturas cuya única “virtud” es su independencia política), o en organización con real vocación de incidir. En Chile ambos fenómenos conviven, sin embargo el segundo ha tomado especial fuerza desde el 2011.

Diversos síntomas permiten afirmar lo anterior: un nuevo boom de la militancia en organizaciones políticas, el mismo reemplazo de colectivos locales por otros

nacionales, la disposición a incorporar demandas de otras áreas en la búsqueda de un proyecto alternativo (partiendo porque la salud y las pensiones también dejen de ser negocios y sean derechos básicos garantizados por el Estado) son ejemplos de esto.

Previo a describir en qué se traduce esta politización, es importante hacer ver que Chile está en un año electoral, en el cual se renueva la totalidad de la Cámara de Diputados, la mitad del Senado y se elige un nuevo Presidente. En la elección presidencial, todo apunta que la nueva Presidenta de Chile será nuevamente Michelle Bachelet, quien volvió con un discurso distinto al que se fue, incorporando varias consignas estudiantiles en su programa educacional, pero manteniendo una conveniente ambigüedad respecto a los contenidos reales de tales titulares.

En ese sentido, la complejidad del escenario significa también que las diversas tesis al interior del movimiento estudiantil para efectivamente incorporarse a la lucha política sean muy variadas. Describiré las principales a continuación. En aras de la transparencia, aclaro que yo milito en la primera de ellas:

- Trabajar por generar nuevas fuerzas políticas, surgidas al calor de la movilización social y de esta forma permitir que sean muchos más los grupos sociales que ven sus intereses y sus ideologías representadas en la lucha política. Esto se traduce en un potenciamiento de la lucha estudiantil como aquella que demostrado ser la más capaz de cuestionar los pilares del modelo neoliberal, en develar el carácter político de esta lucha (como ocurrió por ejemplo con la demanda por un plebiscito el año 2011), y también en la presentación de candidatos a diputados sin aliarse con la Concertación, asumiendo lo difícil que es ganar en esas circunstancias pero participando así del debate político más importante del año y demostrando que no es necesario aliarse con los sectores hegemónicos para poder generar esfuerzos políticos con anclaje social.
- Incorporarse de lleno a la institucionalidad para tensionarla “desde adentro”. El Partido Comunista chileno lleva varios años profundizando su alianza con la Concertación, y este año tal alianza se convirtió derechamente en la incorporación del PC al conglomerado que ahora se llama “Nueva Mayoría”. Es importante recordar que una parte importante de los principales dirigentes sociales y estudiantiles de estos últimos son militantes del PC, y hoy algunos son candidatos en el marco de esta alianza. De esta manera, se procura forzar posiciones más progresistas en un eventual gobierno de Bachelet, basados en una mejor posición a nivel parlamentario y en la propia fuerza social.
- Omitir posiciones claras respecto a la organización política propiamente tal y en particular al escenario electoral, poniendo el acento en la generación de alianzas con otros sectores sociales.

Quisiera compartir algunas reflexiones sobre el carácter global de los nuevos movimientos sociales, pues varios elementos son comunes. Ya compartimos algunos elementos que permiten comprender porqué la juventud ha tomado este rol protagónico. Sin embargo, el riesgo de ser solamente testimoniales o episódicos es muy grande. Nosotros no estamos dispuestos a ser un mayo del '68, recordado con nostalgia pero sin incidir.

Para ello, es fundamental la politización en el mejor sentido de la palabra de estos movimientos sociales. Generar conciencia de clase, comprender que la cuestión del poder es central si no se quiere seguir dependiendo de la voluntad de gobiernos contrarios a nuestras reivindicaciones. Avanzar desde la mera indignación y denuncia hasta la generación de nuevos idearios y proyectos nacionales -en Chile, por ejemplo, cada vez más se entiende la importancia de conquistar nuestros derechos básicos en general, erradicando el lucro no solamente de la educación sino que también de la salud y de las pensiones, y exigiendo al Estado un rol activo y garante en todas esas áreas-. No se trata de ser nostálgicos peleando por lo que se peleó hace 50 años, sino que comprender las nuevas contradicciones y realidades y soñar sociedades diferentes desde nuestras propias vivencias. Asumir además el carácter democrático de nuestras luchas, carácter que no se resolverá simplemente por la generación de mecanismos formales, sino que fundamentalmente porque los diversos sectores sociales puedan generar sus propias formas de representación política sin depender aquéllas hegemónicas por las élites. Y especialmente, asumir que la lucha, la acción colectiva y la movilización son procesos necesarios en los que todo lo anterior puede ocurrir, siempre y cuando tal sea la vocación de los movimientos sociales.

El proceso de organización, para aquéllos que reconocemos en las demandas de los movimientos sociales demandas de izquierda, presenta dos riesgos. Por una parte, caer en el viejo izquierdismo tradicional, incapaz de hablarle a actores sociales más amplios. Si el movimiento estudiantil chileno, así como otros movimientos sociales, han sido tan trascendentes es por su transversalidad y convocatoria. Esta transversalidad no es casual, y se basa por ejemplo en reconocer en el endeudamiento una contradicción propia del siglo XXI, más material para amplias capas de la sociedad que cualquier otra que se pueda intentar relevar.

El otro riesgo es el independentismo, negar los procesos políticos y suponer que toda reivindicación, por el hecho de venir de un espacio social, es deseable. La idea abstracta de "unificar todas las demandas", suponiendo que el problema se basa solamente en que los políticos son malas personas, desconociendo los conflictos entre intereses sociales, es muy fácil terminar defendiendo banderas regresivas y muchas veces contradictorias entre sí. Tres ejemplos: a) En Chile hay grupos que presionan por la eliminación del impuesto a la bencina. Éste es un impuesto verde y que reduce los niveles de congestión, y por lo tanto -más allá de ciertos matices como liberar a los taxistas de este pago- es un impuesto coherente con la construcción de una sociedad más igualitaria, y por lo mismo yo no estaría

dispuesto a defenderlo. b) En varios países se ha comenzado a dar un debate respecto a la legalización del autocultivo de la marihuana. Siendo una idea que yo comparto, yo la definiría como una demanda mucho menos central que muchísimas otras. La ausencia de un proyecto político que defina prioridades, puede fácilmente poner una demanda que haga más fácil el fumar marihuana al mismo nivel que la pelea por la educación o la salud pública. c) En Ecuador existe una importante reserva de petróleo en un parque nacional. No explotar el petróleo significa coartar las posibilidades de un pueblo ecuatoriano lleno de carencias, el hacerlo es dañar al medio ambiente. Este es un caso claro en el que diversos actores sociales tienen intereses contrapuestos, ambos coherentes con una idea etérea de un país más justo. Por cierto que este problema es mucho más complejo que los anteriores, y seguramente la construcción de un proyecto político que pueda tomar posturas sobre estos temas y mantenga su vocación de mayorías solamente se podrá lograr en la experiencia misma. El punto central es volver a relevar que si no hay una vocación de construir proyectos políticos desde las luchas sociales (y de esta forma, con una vinculación vital con ellas) entonces sólo generamos el riesgo de ser episódicos, o peor aún, de construir condiciones para que sean actores con otros intereses los que terminen definiendo como tales conflictos se resuelven. Criticar la política por su desconexión con las demandas sociales, y no construir una alternativa desde el mundo social, es agua para el molino para populismos o para proyectos incluso más derechistas.

Gramsci escribió "El viejo mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer. Y en ese claroscuro surgen los monstruos". Monstruos capaces de robar la vida de lo nuevo para extender la de lo viejo. Que estos monstruos sean exitosos, que el poder sea capaz de nuevamente legitimarse aprovechándose de nuestras movilizaciones dependerá de si les regalamos la oportunidad para ello.

8. El futuro del conflicto en Chile.

Lo anterior explica ya las causas que explican la emergencia de un nuevo actor social con perspectivas de poder en la juventud chilena. Sin embargo, este texto estaría incompleto si no explicita que este potencial transformador y este potencial político de la juventud chilena está absolutamente en disputa aún.

Lo que ha ocurrido los últimos años, la radicalidad de las demandas, la potencia social detrás de ellas, la incapacidad de la política para resolverlas, podrían terminar en una refundación de la política que permita verdadera relación con los actores sociales y un nuevo pacto social que reconozca derechos básicos.

Sin embargo, también es perfectamente plausible imaginar un mero reacomodo de la política actual, que aparente cambiar mucho pero que en lo profundo deje todo exactamente igual. Los intentos por procesar las demandas educacionales en los márgenes actuales seguirán existiendo (por ejemplo, incrementando fuertemente

el número de becas), y si ello ocurre con legitimidad social entonces estaremos frente a una nueva posibilidad desaprovechada.

La convicción y la madurez de los movimientos sociales y en especial del estudiantil serán claves. Saber enfrentarse a un gobierno diferente exigiendo participación directa, manteniendo la claridad de que delegar en esta política es un sinónimo de perder, será necesario no solamente para que la reforma educacional que vaya a existir esté realmente en la línea que hemos venido exigiendo, sino para seguir consolidando la organización y participación de actores sociales históricamente excluidos.

Nuestras movilizaciones han movido las fronteras de lo posible y nos han devuelto nuestra capacidad de soñar. Que esos sueños se conviertan en realidad es el desafío, y cumplirlo depende que estemos dispuestos a hacernos cargo.